

ese pacto: que en 10 de Diciembre del mismo año 1872, citados á junta los interesados por el árbitro, levantaron ante él, una acta en que sin afectar la esencia de lo convenido por ellos en la escritura de compromiso y con la expresa declaración de que ese acto no innovaba en manera alguna su contrato, facultaron al árbitro para que practicasen ciertas diligencias.

Que pronunciado el laudo con posterioridad, la parte de Arena interpuso el recurso de casación, contra varios puntos del mismo laudo; y la parte de Robleda sin haber consentido este recurso manifestó interpondría el de amparo por la infracción del art. 14 Constitucional, como lo ha verificado, una vez que el Tribunal Superior pronunció su sentencia de casación: y

Considerando: Primero: que los derechos que las partes adquirieron en virtud de las escrituras de un contrato solemne, fueron un hecho anterior á la vigencia del Código de procedimientos de 15 de Setiembre de 1872.

Segundo: que en la junta que tuvieron los contrayentes el 10 de Diciembre del mismo año de 1872, ante el árbitro Icasbalzeta, no pactaron cosa diferente que afectara la esencia del convenio reiterado, pues antes bien, asentaron de una manera expresa, que no importaba esa junta novación alguna en el pacto solemnemente convenido.

Tercero: que al declararse por el Tribunal Superior del Distrito en la sentencia contra la que ha pedido amparo el C. Robleda, que ha lugar á la casación conforme al Código de procedimientos; se aplicó por ese Tribunal una ley posterior á un hecho anterior, privando al C. Robleda de un derecho adquirido en virtud de un contrato solemne y perfecto, dándole efecto retroactivo al Código é infringiendo con este acto el art. 14 constitucional.

Por estos fundamentos se declara:

Primero: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez segundo de Distrito de esta capital, que declaró que la justicia de la unión ampara y

protege al C. Felipe Robleda, como representante de su esposa la Sra. Doña Manuela Guerra, contra la sentencia de la primera sala del Tribunal Superior del Distrito que falló, que habia lugar á la casación interpuesta por Don Alejandro Arena, y que casó los números 7, 15, 50, 67, 28, 64 y 65 del laudo arbitral pronunciado por Don Joaquín García Icasbalzeta.

Segundo: Lo acordado.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—José Arteaga.—José M. Lozano.—Ignacio M. Altamirano.—M. Auza.—Ignacio Ramires.—E. Montes.—J. M. Vigil.—Miguel Sandoval.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa Secretario.*

Es copia que certifico.—México, Noviembre 12 de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido por los Sres. Elorza y Mendía ante el juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa, contra el C. administrador de rentas de Mazatlan, que se niega á recibirles en moneda de cobre, el pago que hacen por derechos de consumo y contribucion federal.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, evacuando el último traslado que previene la ley en los juicios

de amparo, y contestando aunque someramente á lo manifestado por el C. administrador de la aduana terrestre, tanto en su larga nota, alegato de 15 de Setiembre, que indebidamente forma parte de este juicio, como en su último reducido informe, pasa á exponer: El espíritu de todas nuestras leyes sobre facultades económico-coactivas, así las generales de 20 de Enero de 1837 y 20 de Noviembre de 1838, como la particular del Estado de 30 de Noviembre de 1873, á pesar de lo contrario que ellas son tanto en sus tendencias como en su letra, á los principios en que actualmente están basadas nuestras instituciones constitucionales, leyes que subsisten solo por una de tantas contradicciones en que de hecho se falsean los derechos del hombre y las garantías que para conservarlas dió la Constitución de 1857 y deben asegurar en consecuencia las de todos los Estados, por mas que rebusque el C. administrador, el espíritu de todas esas leyes odiosamente restrictivas y aun la mas odiosa y mas cínica mente restrictiva del Estado de 30 de Noviembre de 1873, que recargó é hizo aun mas precaria la situacion del CAUSANTE MOROSO DE CONTRIBUCIONES, no es otro, repito, por mas que su absolutismo haya hecho ver otra cosa al C. administrador, que el de preparar los juicios contenciosos, de manera que la hacienda pública no litigue despojada; en una palabra, asegurar y solamente asegurar los intereses fiscales. Pues bien: siempre que de cualquiera manera racional y positiva, la hacienda pública tenga asegurados sus intereses de modo de no presentarse al juicio despojada, desde ese momento deben cesar los procedimientos coactivos, desde ese momento los apremios, los recargos, todas las torturas inventadas para reducir al CAUSANTE MOROSO, deben cesar; y cualquiera procedimiento en contrario, no es mas que un abuso de los funcionarios fiscales. Y digo causante moroso, porque si se examinan las razones y motivos de la existencia de esas leyes especiales, se verá que

solo fueron dadas, primeramente para que la hacienda pública no se viera desfalcada; y secundariamente para castigar de una manera indirecta la morosidad de los causantes de contribuciones.

La insistencia del C. administrador en continuar los trámites de embargo y remate, la de aplicar á toda la carga el secuestro cuando los derechos fiscales estaban asegurados ampliamente con la cuarta parte, no indica ciertamente que le guíe un espíritu equitativo y de conciliacion, sino mas bien parece que procede de un antagonismo manifiesto y de un mal desco de sobrecargar los vejámenes y perjuicios del causante.

En cuanto á sus razonamientos en materia de competencia de parte de los Tribunales federales para intervenir en los procedimientos que llama estrictamente administrativos, cree el fiscal que no es oportuno ocuparse de ellos y que seria de ningún momento cuanto se dijera en este lugar: la estemporánea defensa de la soberanía del Estado y el indirecto desconocimiento de la ley federal, que parece no debe ser ley en el Estado, segun el C. administrador, como si este no formara parte de la federacion mexicana, son tambien opiniones y erencias que el representante del ministerio público no está llamado á debatir, y por esto es que igualmente se desentende de ellas, así como de la declaratoria de jurisdiccion que interpone, olvidándose de que no es parte en el juicio y que su deber, en los de esta naturaleza, se reduce simplemente á informar en su tiempo y lugar y nunca entrar á discutir sobre el cumplimiento de los mandatos judiciales.

Por todo lo expuesto y concretándose el que suscribe al punto de la procedencia del amparo solicitado por los Sres. Elorza y Mendía, punto que ya ni discutible es, despues que las resoluciones supremas de la Corte Suprema de Justicia han formado una jurisprudencia especial para todos los casos iguales al presente, el fiscal concluye pi-

diendo al juzgado, que por los mismos legales fundamentos en que ha apoyado sus anteriores pedimentos en otros amparos de los mismos Sres. Elorza y Mendía se resuelva, que la justicia de la Union los ampara y protege en este caso, contra los procedimientos del C. administrador de la aduana terrestre que se resiste á admitir en moneda de cobre de la que ya no circula en Sinaloa, el pago de los derechos á que este expediente se refiere.

Así parece que procede en justicia.

Mazatlan, Octubre 8 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Octubre 19 de 1874.

Vistos: Los Sres. Elorza y Mendía de este comercio y vecindad, se han presentado pidiendo amparo contra el C. administrador de rentas de esta Ciudad, que les exige en moneda de plata ó oro, con exclusion de la de cobre, la cantidad de 334 pesos 38 centavos, por derecho de consumo y contribucion federal de cuarenta barriles vino mescal y 100 tercios arroz, y porque los retiene todas las mercancías mientras no verifiquen el pago, ó se rematen las necesarias para cubrir el adeudo.

Previos los requisitos legales se mandaron suspender los actos que se reclaman, disponiendo que en lugar de los efectos embargados, recibiera esa oficina fianza ó depósito de la cantidad que exige, como, lo ofrecieron los quejosos.

El C. administrador se niega á devolver los barriles, alegando que una vez hecho el embargo, como se verificó en los barriles, por defecto de pago, ya no puede admitirse á los causantes el depósito, con arreglo al art. 9º del reglamento expedido por el Estado en 20 de Noviembre último para el ejercicio de la facultad coactiva, y que despues del embargo, para librarse del remate no le queda mas remedio que verificar el pago segun el art. 6º de la ley general de 20 de Noviembre de 1838.

Dictados algunos trámites para ejecutar el auto de suspension, los interesados pidieron que se suspendieran los demás que marca la ley, y que se fallara el juicio en lo principal.

Considerando: que el fundamento con que el C. administrador excluye la moneda de cobre, es la fraccion 23 del artículo 1º de la ley del Estado, de 28 de Diciembre último, y que con arreglo á los artículos 72 fraccion 23 y 111, fraccion 3ª de la Constitucion general, el Estado de Sinaloa carece de facultades para rehusar y hacer cesar en su circulacion, la moneda de cobre acuñada en una oficina federal, cual es la casa de moneda de Culiacan, y emitida bajo la garantía de que seria recibida, no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieran curso legal y forzoso, cuales fueron los poderes públicos del mismo Estado: que no admitiendo á los quejosos la moneda de cobre en pago de las contribuciones de que se trata, se les priva, sin previa indemnizacion, del derecho que les dió su emision.

Considerando: que desde luego que se cobraron á los Sres. Elorza y Mendía los derechos del arroz y mescal, no se resistieron á pagarlos, sino que ofrecieron hacerlo en moneda de cobre, y el C. administrador se negó á recibirla exigiendo que fuera en plata ó oro: que el derecho del Fisco del Estado para exigir en moneda de plata ó oro todas sus contribuciones, con exclusion de la de cobre, no es claro é indudable como lo requiere el art. 3º de la ley general de 20 de Enero de 1837, para que proceda el juicio de la facultad económico-coactiva: que habiendo ofrecido los quejosos hacer el pago en una moneda que no se ha retirado legalmente de la circulacion, no hubo motivo legal para retenerles los cien tercios arroz, ni para embargarles los cuarenta barriles vino mescal.

Con fundamento de los artículos 16, 27 y 101 fracciones 1ª y 3ª de la Constitucion, é iguales fracciones del art. 1º de la

ley de 20 de Enero de 1869 y los demás citados, se resuelve.

La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mendía, contra los actos del C. administrador de la aduana terrestre de esta ciudad, por los que se niega á recibirles en moneda de cobre, los derechos de consumo y contribucion federal que causaron cien tercios arróz y cuarenta barriles vino mescal, y se les retiene contra su voluntad.

Hágase saber, remítase copia de esta sentencia al Semanario Judicial, otra al periódico de esta Ciudad para su publicacion, y los autos originales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision.

El C. Lic. Joaquin García, 2º suplente del juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, definitivamente juzgando, así lo provoyó y firmó por ante mí.

Doy fé: *Joaquin García.*—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Octubre 23 de 1874.
Francisco Medina, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 30 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Elorza y Mendía ante el juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa, contra el C. administrador de rentas de Mazatlan, que se niega á recibirles en moneda de cobre la cantidad de 334 pesos 38 centavos, por derechos de consumo y contribucion federal por 40 barriles vino mescal y 100 tercios arróz; alegandó que con este hecho se vulneran las garantías de los arts. 27 y 72 en su fraccion 23. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; el auto de suspension decretado por el juez de Distrito, de los procedimientos de facultad económico-coactiva que seguia, para el pago, dicho administrador; la resistencia de este funcionario para dar cumplimiento

á este auto; el requerimiento al C. tesorero general del Estado, para que como inmediato superior obligara al cumplimiento expresado; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente y

Considerando: que la moneda de cobre que circulaba en Sinaloa con un valor legal superior al de la materia de que está formada, quedó reducida á esto último por la ley del Estado de 31 de Diciembre de 1872, que previno no fuera forzosa su circulacion, ni se admitiera en pago de contribuciones, recayendo la pérdida del valor sobre los tenedores de la moneda, sin recibir indemnizacion alguna por el menoscabo que sufren en su propiedad; que la legislatura de Sinaloa carece de toda facultad para rechazar y hacer cesar en su circulacion una moneda acuñada en una oficina federal, cual es la de Culiacan, y emitida bajo la garantía de que seria recibida no solo por los particulares, sino tambien por las autoridades que le dieron curso legal y forzoso. Considerando: que del expediente consta que el juez, al decretar la suspension, mandó que los interesados depositaran la cantidad de que se trataba, en moneda de plata ú oro, para asegurar los intereses de la hacienda pública del Estado, cuyo auto importa una suspension condicional no autorizada por la ley: que tambien consta que la autoridad ejecutora no quiso dar cumplimiento al auto de suspension, así como tambien, que requerido el superior inmediato se negó á su vez y aun el Ejecutivo sostuvo esta negacion. Con fundamento de los arts. 27 y 72 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869. Se decreta: 1º. Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró, que la justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mendía contra los actos de que se quejan. 2º. Se advierte al juez que decretó la suspension del acto reclamado, que no ha tenido facultad legal para decretarlo en los términos en que lo verificó; y 3º. Que respecto de la des-

obediencia de las autoridades del Estado á la suspensión del procedimiento, obre el juez con arreglo á la ley, bajo su responsabilidad.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 5 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido por los Sres. Elorza y Mendía ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el ciudadano administrador de la aduana terrestre de Mazatlan, que se niega á recibirles en moneda de cobre la cantidad de trescientos treinta y siete pesos, cincuenta centavos, por derechos del Estado y contribucion federal.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano juez de distrito.

El promotor fiscal encuentra el presente caso de amparo solicitado por los Sres. Elorza y Mendía, en igualdad de circunstancias que otros promovieron por la misma cosa contra los procedimientos de la aduana terrestre que no admite en pago de dere-

chos, la moneda de cobre. Es patente la invasion de facultades federales, en virtud de semejante procedimiento; por consiguiente procede el amparo y así pide el fiscal al juzgado se sirva determinarlo.

Mazatlan, Setiembre 28 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Octubre 3 de 1874.—Vistos:

El cinco de Setiembre último se presentaron ante este juzgado los Sres. Elorza y Mendía pidiendo amparo contra el acto del ciudadano administrador de la aduana terrestre de esta ciudad, por el que se niega á recibirles en moneda de cobre, trescientos treinta y siete pesos cincuenta centavos que les cobra por derechos del Estado y contribucion federal de trescientos tercios harina, que les vinieron á su consignacion.

Fundan su queja en las fracciones 1ª y 3ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, exponiendo, que con tal exclusion se les priva del valor legal de dicha moneda reduciéndola al del metal que está formada, sin indemnizarlos previamente con arreglo al art. 27 de la Constitucion; y que la misma exclusion prevenida por la fraccion 22 del art. 1º de la ley del Estado de 28 de Diciembre último, se hizo sin facultades por la legislatura del mismo é invadiendo la esfera de atribuciones del Congreso de la Union, señalada por la fraccion 23, art. 72 del propio Código.

Previa la suspension del remate que se iba á hacer de quince jabas de loza que se embargaron á los Sres. Elorza y Mendía, por defecto del pago en moneda de plata ú oro, el administrador informó que se negaba á recibir la de cobre en el caso propuesto, porque la parte final de la fraccion 22 del art. 1º de la citada ley del Estado, dispone que se paguen en moneda de plata ú oro las contribuciones y derechos que al